

FOSAS COMUNES EN PUTUMAYO

Lo que la costumbre dice o calla

Bogotá, 12 de mayo de 2007

La costumbre es uno de los efectos que se ha ido haciendo parte de la cotidianidad, el develamiento de los horrores del paramilitarismo como el de las fosas comunes son parte del diario devenir, que no logra conmover los mínimos de la sensibilidad y por tanto la actuación, el agenciamiento civil y el cambio de lógica para comprender el presente.

Somos presos o esclavos de la costumbre y de una cualificación de los mecanismos del consentimiento, la fábrica del consenso, siguiendo a Chomsky.

Las fosas comunes son uno de los medios de construcción de la impunidad, son parte de la estrategia de encubrimiento, de ocultamiento y de falsación de la realidad. La tortura, la desaparición forzada, la eliminación física, preceden a la integración de cadáveres, su sepultura e inhumación en parajes dominados por las mismas estructuras criminales aseguran la impotencia, la paralización, el silencio.

Hoy pareciera que se ha abierto, el espacio de la revelación, de la palabra y de la verdad, pero en realidad, quizás estamos acudiendo al ambiente, a la sensibilización de la reconciliación "consentida", es la transacción de la realidad con la verdad posible, de la ética con las conveniencias políticas.

Se olvida las fases de la estrategia paramilitar en Putumayo, no se nombran, descuido histórico. Allí en 1.989 sustentado en los Decreto 3398 de 1.968 antes de que quedarán sin piso legal, las "Autodefensas" tenían un foco de desarrollo en el Bajo Putumayo, cuando se ilegalizan ya existe una estructura básica como desarrollo de la estrategia nacional definida en Puerto Boyacá.

En la región, en apariencia lo que es una paradoja, los paramilitares se sustentaron económicamente por traficantes de droga, quienes a su vez operaron con estructuras paralelas de la Policía Antinarcóticos y de las Fuerzas Militares consentidas como estrategia "contrainsurgente". El blanco predilecto fueron en ese momento los jóvenes, a quienes en razón de identidad se les asocia como milicias de la guerrilla de las FARC EP. Muchos de ellos se encuentran en las fosas del presente, que se identifican con la violencia del 98 al 2001. En realidad es un proceso que se inicia en 1.989.

Como consecuencia de las denuncias de ese momento no hubo más remedio que ante lo escandaloso de la evidencia parainstitucional entre el 89 y el 91, el Comandante de la Policía resolvió trasladar todo el personal a otra regiones. Al tiempo las investigaciones penales y disciplinarias sepultadas, en las que los testigos ya hablaban de las fosas comunes.

En un cambio de táctica las estructuras criminales desde 1.992 mantuvieron su presencia y desarrollaron técnicas menos escandalosas y produjeron limpieza entre ellos mismos y aleccionamientos selectivos hasta 1.997.

Desde ese año, 1.997, las operaciones se desarrollaron con un aseguramiento del silencio de la población con fases de arrasamiento, de aseguramiento de la población – economía, organización, recursos oficiales- desplazamiento gota a gota y el control del tráfico de drogas. La implementación del Plan Colombia de ningún modo, propicio la desaparición de la estrategia paramilitar por el contrario se beneficiaron de la militarización institucional.

El pretexto de persecución a la guerrilla de las FARC EP permitió el desarrollo de técnicas combinadas. Sofisticación de la ceguera policial a las operaciones paramilitares en los cascos urbanos de La Hormiga, Orito, Puerto Asís. Sofisticación de la ceguera militar en las operaciones paramilitares sobre los ríos y sus afluentes, el control de las siembras campesinas de hoja de coca, desplazamiento de la población y control de las siembras. En las partes medias rurales y en los cascos urbanos controles permanentes a la movilidad de la población. Hospitales, centros de abastos se convirtieron en lugares estratégicos de información y bajo la sola sospecha de ser “guerrilleros”, los campesinos eran ejecutados en los mismos centros de atención de salud o el terminar de mercar. Estos restos eran arrojados a los ríos o dejados a la luz pública, pero para encubrir la responsabilidad y evitar los escándalos se iniciaron las técnicas de las fosas comunes en su segunda fase.

Hoy Orito, La Hormiga, Puerto Asís son centros del desarrollo de la estrategia socio política de lo paramilitar, dimensiones que no son ubicadas en el contexto de la aparición de las fosas comunes. Son 18 años de la implementación de la estrategia paramilitar.

El paramilitarismo como estrategia militar, y luego en sus fases sociales y políticas solo ha sido posible en cada etapa por su interacción con políticas y estrategia militares de la Brigada y de los Batallones especiales; el apoyo financiero de terratenientes, empresarios y traficantes de drogas, y ahora con la alianza a sectores afines con intereses en el mercado mundial; en el apoyo político de las administraciones, consejos, diputaciones municipales y departamentales, quiénes en un primer momento por presión, luego las que le sucedieron por articulación se articularon a un proceso de institucionalización política, pues en el congreso, militares de alto rango recibieron los ascensos a pesar de sus record en violaciones de derechos humanos en el Putumayo; la inacción del ente investigador y de los organismos de control que como piedras dejaron de asumir el deber de investigar, de esclarecer y de posibilitar el acceso a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación Integral. Y finalmente, lo que merece un capítulo, por supuesto, el pretexto de la existencia de la guerrilla de las FARC EP en el Putumayo, su desbordamiento e infracciones al derecho Humanitario en la guerra propiciaron un imaginario para “legitimar” el desarrollo de ese proyecto de Estado.

La mimetización paramilitar en la seguridad “democrática”

Por eso parece que la información de la prensa puede estar ritualizando la “conciliación consentida”, la descontextualización y la mimetización de la seguridad “democrática”, así ellos no lo crean ni se lo propongan

Los relatos de la prensa son restringidos a no más de 700000 mil lectores y los mismos se expresan en un contexto en que se tienden miradas hacia la conciliación. Aunque los relatos rompen con la cultura del flasheo estos no profundizan.

Al leer los relatos se percibe siempre una historia oficial en la que se reafirma el imaginario y la tesis institucional de la ocurrencia de estos Crímenes de Lesa Humanidad como resultado de la confrontación de grupos terroristas, en el caso de Putumayo por el tráfico de drogas.

Es la reinención de la teoría de los dos demonios, con la virtud de que el Estado es una víctima, incapaz e impotente. Pero además, desde ya se suscitan serios cuestionamientos al tratamiento que se realiza por parte de la Fiscalía en desarrollo de la acción de investigación y recolección de pruebas, que será el tránsito hacia un nuevo camino a la impunidad, a la falsedad.

Como consecuencia de lo anterior la sensibilidad que despiertan los relatos no permite suscitar un análisis más profundo en varios aspectos.

- **La responsabilidad estatal a través de** estructuras militares y policiales y de las administraciones departamentales, municipales y su interacción con las nacionales en el desarrollo de esta técnica de represión de la estrategia paramilitar.

- **La inacción estructural del ente investigador** no se nombra, no se indica, ni se insinúa. Queda implícitamente justificada la irresponsabilidad estatal por la barbarie de las estructuras armadas responsables, en una situación tan conflictiva es imposible actuar. No develan la responsabilidad de la fiscalía en el deber de investigar y de haber actuado.

Se da por descontado que lo que hoy se realiza como práctica forense es adecuado, sin valorar el desarrollo de procedimientos técnicos idóneos, con la suficiente información para que los familiares de las víctimas puedan tener certeza sobre la verdad, y la posibilidad de tener derecho a enterrar.

- **Las pretensiones del Terror** quedan subsumidas en una interpretación parcial que oculta los intereses económicos territoriales que están detrás de las estrategias paramilitares. Se deja de un lado las pretensiones de control territorial para proyectos petrolíferos, obras de infraestructura y agonegocios.

Se limita a dar una versión parcial de control de la siembra de coca, también desfigurada, y asociada a la participación en toda la cadena de producción y mercado de la cocaína de los que están en armas. Destaca aspectos de una estrategia contrainsurgente el plano militar de las pretensiones existentes, dejando de lado el modelo de sociedad y de Estado que se consolidó en el Putumayo, en Puerto Asís, Hormiga, Orito, hasta el día de hoy.

- **La seguridad "democrática" del encubrimiento**

El hallazgo de fosas comunes parece obedecer a los resultados de una política institucional. A través de la seguridad, militarización cotidiana, se crean las condiciones para la operación del ente investigador. Sin embargo, de oculta la reingeniería paramilitar como estrategia militar de la institucionalidad.

En La Hormiga, en Orito, en Puerto Asís las estructuras criminales hoy dominan el control del comercio, la vida social, se apropian de tierra, mantienen la convivencia con el aparato institucional, "que posibilita" el acceso a la verdad.

Se simula, se crea la sensación de un cambio, que en realidad es una mimetización del aparato paramilitar en la seguridad "democrática" y una metástasis de la costumbre que asegura la impunidad. Las estructuras criminales de tipo paramilitar no se han ido, están ahí como estrategia que es no solo militar sino también social, económica y política.

Están ahí, mimetizados ahora en la seguridad democrática, financiada a través del Plan Colombia. No se han ido, como tampoco, la memoria de miles de miles de sus víctimas, como cientos de testigos que algún día, cuando existan menos farsas quisieran contar.

Dejamos a ustedes los relatos de El Tiempo y El Espectador sobre La Fosas Comunes.

COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ

El regreso de los muertos

Dolorosa crónica sobre macabros hallazgos en las fosas comunes que los paramilitares dejaron a su paso por el Putumayo.

Hollman Morris / Especial para El Espectador sábado, 12 de mayo de 2007

"Los muertos contarán la historia", expresó exhausto el joven antropólogo después de exhumar algunos restos de personas en el lejano municipio de La Dorada, en la selva del Putumayo. Tras varios días de trabajo, como los demás miembros de la Comisión de Justicia y Paz de la Fiscalía desplazada al sur del país, el avezado profesional quedó estupefacto con el macabro descubrimiento. La muerte sólo dejó en la región el estigma de una espantosa guerra sucia.

A cargo del fiscal Juan Carlos Goyeneche, la comisión partió de Puerto Asís protegida por un grupo de policías y detectives. Junto a los miembros de la Fiscalía, una odontóloga, un antropólogo y dos biólogos bien armados. Luego de dos horas de viaje por una maltrecha carretera, al llegar al puente sobre el río Guamuez, la comisión se detuvo en un retén militar. El nerviosismo sacó de su mutismo a los viajeros. "Está oscureciendo y nosotros aquí", comentaban.

En su fuero interno, ninguno descartaba un ataque de la guerrilla, o de las Águilas Negras o de Los Rastrojos, que operan en la zona. El retraso implicó que se rompiera el sigilo de la operación. Unos a otros se preguntaban: ¿Por qué para estos casos no puede contarse con un helicóptero? Pasado el tiempo, el Ejército autorizó el acceso y la Comisión de Justicia y Paz siguió en su misión: buscar en las fosas los rastros de la verdad del paramilitarismo en el sur de Colombia.

Ya en La Dorada y en horas de la madrugada, comenzaron a repetirse los tropiezos. "Alcalde, préstenos unas palas", reclamó uno de los funcionarios judiciales cuando empezó la excavación. "¿Alguien tiene para la gasolina de los carros?", preguntó otro. Y la noticia del arribo de la comisión se regó como pólvora en el pequeño pueblo de escasos 6.000 habitantes. Por eso, en pocos minutos, Héctor Mayorga, detective adscrito a la Dijín, ya estaba comprometido con familiares de víctimas a regresar al casco urbano con respuestas.

Con una carpeta bajo el brazo y una decena de fotos con los retratos de las víctimas, Mayorga se encaminó con los demás al sitio conocido como "La Marranera". Una vez en el lugar, el antropólogo Jaime Castro empezó a dar las instrucciones para iniciar el trabajo. "Todos en hilera, pendientes de las deformaciones del terreno o donde cambia de color la vegetación. Si detectan estas modificaciones, me llaman". En pocas palabras, una especie de "operación rastrillo" para encontrar muertos.

Doce banderas

No pasaron muchos minutos cuando alguien llamó la atención sobre una ondulación del terreno y de inmediato se clavó el primer barrero, una varilla alargada con una especie de tenazas en el extremo. Con manos de cirujano, el antropólogo tomó una muestra de tierra, la olió, observó el color de la tierra y dijo: "Aquí puede haber restos". El topógrafo levantó un croquis, comenzó la excavación y rápidamente aparecieron unas botas y los restos de un hombre. A su lado, un cráneo sin esqueleto adyacente.

"No es uno, son varios cadáveres", señaló el antropólogo y luego empezó a dibujar en la tierra un cuadrado. En su perímetro, poco a poco fueron apareciendo más restos de hombres y a cada hallazgo un comentario técnico doloroso: "esta fractura de fémur fue con machete y se nota que fue un cuerpo desmembrado". Horas más tarde, un confeso joven paramilitar corroboró la tesis del antropólogo: "En esta guerra había que descuartizar a la gente viva". Un cráneo con dos orificios. "El disparo dejó el mentón pegado al pecho".

Así pasó la tarde calurosa y acompañada de una romería de personas, la mayoría mujeres, pendientes de noticias. "Estos son hilos de un collar de mujer", "Este es un antebrazo", y del hueso colgando un reloj que quedó marcando las cuatro de la mañana o de la tarde. La carta de identidad de un ecuatoriano, y ante cada resto el aporte de una entomóloga, es decir, de una bióloga experta en insectos; de una odontóloga examinando dientes intactos; de un fotógrafo captando retazos de prendas; y de policías y soldados que no se atrevieron a mirar.

Al final de la jornada, quedaron en la explanada doce banderas rojas que señalan doce fosas y que sumadas demuestran que aquello fue un campo de exterminio y después un cementerio clandestino. El antropólogo concluyó con un interrogante: "¿Sí ve?, los muertos cuentan sus historias". Y fueron cinco días más, y más de 20 cuerpos desenterrados. Después empezaron a llegar hombres y mujeres para contar lo que hasta entonces nunca habían dicho: "Un día llegaron los paramilitares que operaban en la Dorada y se llevaron a nuestros hijos".

Llegaban temerosos, con la cabeza gacha y hablando en voz baja, pero después de los hallazgos empezaron a recordar: "El Personero siempre nos dijo que si queríamos vivir no denunciáramos". En esas apareció una mujer llamada Nancy Galárraga, y de su mano su sobrina de seis años. Suspiró más de una vez, al final tomó fuerzas, y así explicó su caso: "Fue el 1º de enero de 2000. Con mis hermanas fuimos citadas a 'La Marranera' por el comandante Asprilla. Y el hombre me dijo que no me preocupara, que regresara y que las muchachas volvieran más tarde. Nunca lo hicieron".

Desde ese primero de enero sigue esperando a Juliana, de 23 años; a Martha y Lucrecia, mellizas de 18, y a Susanita, de 13. Y desde ese día quedaron huérfanos tres niños. Todos en La Dorada recuerdan el caso de las hermanas Galárraga. "Eran

muchachas muy alegres, salían los fines de semana a los ríos, a vender comida en los paseos". La madre estuvo al borde de la locura porque además de arrebatarle a sus hermanas, los paramilitares le quitaron la casa. Sin embargo, todos los días, durante el tiempo que aquellos se pasearon por el pueblo a la vista de todos, no dejó de preguntarles a los comandantes por la suerte de sus hijas.

El día de las excavaciones, medio pueblo estaba pendiente de las Galárraga. Pero no era la única expectativa. Un joven moreno que ayudó a echar pala como loco y andaba con la Policía, parecía el más ansioso. Era un confeso paramilitar que después fue señalando el sitio de nuevas fosas en la vereda El Placer. Cuando tomó confianza, fue develando crudos pasajes de horror. "Me llamo Róbinson y llegué al Putumayo reclutado en Buenaventura. Me prometieron sueldo de \$700.000 y me dijeron que no tenía que matar sino cuidar laboratorios, pero todo fue engaño. Lo descubrí rápidamente".

A su amigo

El confeso paramilitar tomó un segundo aire y agregó: "Un día los comandantes llegaron al pueblo con varios civiles amarrados y, de repente, uno de ellos dio una orden perentoria: Los nuevos salgan de la fila y fórmense. Y delante de ellos, el comandante alias Maluco agarró del cabello a uno de los civiles y delante de todos le clavó el cuchillo en la garganta. Luego dijo sonriente: 'Esto se hace para que no puedan gritar'. Y luego explicó sin inmutarse que había que tener cuidado con no cortar la yugular, porque la idea era que sufrieran".

"Algunos paracos alcanzaron a desmayarse, pero durante los cuatro años que estuve con los paramilitares, descuarticé a nueve personas". Una de ellas fue a su propio "lanza", es decir, a su mejor amigo. El muchacho contó que tuvo que hacerlo porque quiso desertar del grupo. Entonces lo obligaron a descuartizarlo vivo. El espontáneo narrador hizo silencio, clavó su mirada en el piso, y confesó con amargura: "Me dieron ganas de vomitar, pero tuve que sacarle los órganos, porque si no, me mataban".

Todos quedaron estupefactos. Y el muchacho habló de nuevo: "Había otro comandante a quien llamábamos Muela Rica, porque obligaba a sus víctimas a comer carne humana. Hasta a nosotros nos decía que había que aprender para que no muriéramos de hambre. Cogía los lados más gordos del cuerpo —y señaló su antebrazo y las nalgas— y los cortaba con cuchillo, los echaba a una paila llena de aceite y, a punta de pistola en la cabeza, obligaba a la gente a comer. Después decía que había que beber sangre para saciar la sed de matar".

Después el muchacho se aburrió de recordar y antes de partir con los policías que lo custodiaban, reconoció que quería pedirles perdón a sus víctimas, pero no sabía cómo mirarlas a la cara. Hoy sabe que en cualquier momento lo pueden matar, que algunos de sus antiguos compañeros lo buscan para asesinarlo. Tuvo educación, alcanzó a estudiar un semestre de sistemas, es hijo de una profesora de español, pero un día se dejó arrastrar por el ciclón de la violencia. Ahora, lejos de sus andanzas y en espera de pronta justicia, asombra a todos y concluye: "Yo lo que quiero es estudiar criminalística y ciencias forenses".

Termina su relato y otro confeso paramilitar empieza el suyo: "Un día íbamos por el río San Miguel y observamos a unos guerrilleros en El Afilador. A los pocos días, el comando Cali ordenó sacar a toda la gente de El Afilador a la cancha. Parecía un

El Tigre

Días después, la Comisión de Justicia y Paz regresó al Putumayo. Esta vez a la vereda El Tigre, del municipio de La Hormiga. Desenterraron 20 cuerpos. En medio de los trabajos, apareció la guerrilla y hostigó a los militares que vigilaban la entrada al Valle del Guamuez, a escasos kilómetros del sitio de los hallazgos. Cuando sonaron los disparos, hasta el antropólogo, el fotógrafo y el topógrafo desenfundaron sus armas. El hostigamiento duró apenas 10 minutos, pero continuó el trabajo.

Con demasiado silencio porque los campesinos de la zona prácticamente vivieron secuestrados durante los últimos cuatro años. Sin embargo, en medio de la desolación colectiva, un muchacho identificó el cadáver de su padre, un ex policía. Y en medio de la tragedia volvió a surgir el enigma de las hermanas Galárraga. Entonces alguien dijo que el comandante Asprilla sabe el sitio donde están enterradas. No obstante, hasta hoy no se han podido ubicar. Tampoco a Asprilla, de quien se sabe que ahora comanda a un grupo de sicarios en el Valle.

“Como él, hay muchos que siguen libres”, comenta Róbinson. Y añade: “Es que es difícil cambiar la vida de un día para otro”. Luego admite que estuvo en diferentes albergues por problemas de drogadicción. ¿Cuántos como él pueden seguir en la calle?, pregunta uno de los funcionarios judiciales en la ruta de regreso a Puerto Asís y después a Bogotá. Nadie lo sabe. La mayoría del país desconoce también que en apenas cinco años, en el Putumayo murieron masacrados centenares de colombianos anónimos que apenas ahora cuentan sus historias desde sus despojos.

Recuerdo amargo de una masacre

En la noche del 9 de enero de 1999 un grupo de paramilitares entró a sangre y fuego a la inspección de policía de El Tigre, jurisdicción de La Hormiga (Putumayo), y ordenó al administrador de la planta eléctrica a pagar la luz. A partir de ese momento fue el horror. Los 30 ‘paras’ fueron sacando violentamente a sus víctimas de las casas, fusilando a unas en la calle y a otras degollándolas para luego echarlas a las aguas sobre el río Guamuez. El resultado de esa absurda locura de los asesinos fue 26 civiles muerte y 14 desaparecidos. No contentos con la masacre, se acercaron a una bomba de gasolina para incendiarla y de paso quemar el pueblo. No pudieron, pero en la memoria colectiva quedó grabado ese día de horror y de muerte.